

Señor
JUEZ ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO GUADALAJARA DE BUGA-
REPARTO
E. S. D.

PROCESO: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
DDTE: LUIS HERNANDO SANCHEZ
DDO: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES

GUILLERMO DE JESUS MOLINA CRUZ, mayor de edad, domiciliado y residente en Buga, abogado en ejercicio, con T.P. N° 55052 del Consejo Superior de la Judicatura, actuando en nombre y representación del señor LUIS HERNANDO SANCHEZ, mayor de edad, y vecino de Buga-Valle, con C.C. N° 14.445.042., para que inicie y lleve hasta su culminación PROCESO DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO, CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES-representada legalmente por el Doctor MAURICIO OLIVERA GONZALES, o por quien haga las veces al momento de presentar esta demanda, que fundamento en las siguientes declaraciones:

DESIGNACION DE LAS PARTES

1.- LA PARTE DEMANDANTE: Está integrada por el señor LUIS HERNANDO SANCHEZ con C.C. No. 14.445.042 de Cali

2.- LA PARTE DEMANDADA: Está integrada por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, representada por el Doctor MAURICIO OLIVERA GONZALES, o por quien haga sus veces.

3.- El señor PROCURADOR JUDICIAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS

4.- El señor director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado o quien haga sus veces o lo represente

5.- El apoderado de la parte actora GUILLERMO DE JESUS MOLINA CRUZ, con C.C. No. 14.876.815 de Buga

DEMANDA

Con fundamento en los hechos expuestos y previos los trámites del Proceso Contencioso Administrativo consagrado en el Título V, Capítulo Quinto, Artículos 179 y ss del C.C.A. promuevo ante este despacho NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO contemplada en el artículo 138 del C.C.A., y en forma respetuosa solicito se hagan las siguientes o similares:

DECLARACIONES Y CONDENAS

PRIMERO: Declarar la nulidad del Acto Administrativo de la resolución No. 03450 de marzo 10 de 2005 del Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombina de Pensiones COLPENSIONES, en la que se concede la pensión de jubilación por vejez al demandante con un ingreso base de liquidación de \$1.150.846., una tasa de reemplazo del 75% para una pensión de \$863.135.00 a partir del 01 de abril 01 de 2005 y notificada en mayo 13 de 2.005

SEGUNDO: Declarar la nulidad del Acto Administrativo de la resolución GNR-108228 de abril 18 de 2.016 de la Administradora Colombina de Pensiones COLPENSIONES en la que niega la reliquidación de la pensión de jubilación por vejez al demandante

TERCERO: Declarar la nulidad del Acto Administrativo de la resolución VPB-25811 del 20 de junio de 2016 de la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, en la que se reliquida erradamente la pensión del demandante

CUARTO: Declarar con base en el reporte de liquidación de los salarios, que el valor del salario promedio mensual del último año de servicio del demandante, entre el 01 de abril de 2004 y el 31 de marzo de 2005, asciende a \$1.566.453.00

QUINTO: Declarar que la pensión real de jubilación por vejez a partir del 01 de abril de 2005 a favor del señor LUIS HERNANDO SANCHEZ, asciende a \$1.174.840.00 con base en el salario promedio del último año de servicio de \$1.566.453.00, valor al que se le debe aplicar el 75%

SEXTO: Se condene a la parte demandada a título de restablecimiento del derecho al pago de la diferencia de la pensión de jubilación por vejez a favor del demandante, en cuantía de \$311.705.00 a partir del 01 de abril de 2005

SEPTIMO.- Se condene a la parte demandada a título de restablecimiento del derecho a pagar a mi representada la diferencia de la pensión de jubilación por vejez, entre la otorgada por el Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones y la realmente liquidada actualizada con el I.P.C. establecido por el gobierno para cada año, a partir del 01 de abril de 2005 y hasta el cumplimiento total de la obligación

OCTAVO.- Se condene a la demandada al pago de la indexación de la mesada pensional a partir del 01 de abril de 2005

NOVENO: Se condene a la demandada al pago de las costas procesales

CONSIDERACIONES

PRIMERO.- El señor LUIS HERNANDO SANCHEZ, trabajó como empleado público durante veintiséis (26) años, diez (10) meses y diez y seis (16) días, desde mayo 15 de 1.978 hasta abril 01 de 2.005 en la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C.

SEGUNDO.- Según resolución No. D.G. 307 de marzo 31 de 2.005 la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca C.V.C., aceptó la renuncia del demandante como servidor público partir del 01 de abril de 2005

TERCERO.- El Instituto de Seguros Sociales -Hoy Administradora Colombiana de Pensiones-COLPENSIONES, le reconoció la pensión de jubilación por vejez a mi poderdante, mediante la resolución No.03450 de marzo 10 de 2.005 con un ingreso base de liquidación de \$1.150.846.00, una tasa de reemplazo del 75% para una pensión de \$863.135.00 a partir del 01 de abril 01 de 2005 y notificada en mayo 13 de 2005

CUARTO.- En marzo 08 de 2.016, mi representado presentó ante la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones reclamación administrativa con radicación No. 2016-2339309, para que se reliquidara la pensión a partir del 01 de abril de 2005 con el 75% de todos los factores salariales del último año de servicios

SEPTIMO: La Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones dio respuesta a la reclamación administrativa mencionada en el hecho cuarto con la resolución GNR-108228 de abril 18 de 2.016 en la que niega la reliquidación de la pensión de jubilación por vejez

OCTAVO: En mayo 12 de 2016 mi representado presentó recurso de apelación de la resolución GNR-108228 de abril 18 de 2.016, con radicación de COLPENSIONES 2106-4797578

NOVENO: Con resolución VPB-25811 de junio 20 de 2016 la Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones, resuelve el recurso de apelación en la que esta entidad reliquida erradamente la pensión del demandante y modifica la resolución GNR-108228 de abril 18 de 2.016 de diciembre 28 de 2015, dejando agotada la vía gubernativa

FUNDAMENTOS DE DERCHO

Código Contencioso Administrativo Ley 1437 de enero 18 de 2011 artículos 138, 155 numeral 2, 157, 162 numeral 6, 163, 164 numeral 1 literal c, 179 y 192, artículos 53 y 58 de la Carta Política, artículo 36 de la ley 100 de 1993, artículo 1 de la Ley 33 de 1985, Ley 62 de 1985, art. 6 literal a) del Decreto 813 de 1994

NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE SU VIOLACION

Por ser un derecho cierto y adquirido que le asiste a mi mandante, protegido por los artículos 53 y 58 de la Carta Política, el artículo 36 inciso 2 de la Ley 100 de 1993, el artículo 1 de la 33 de 1985, Ley 62 de 1985 y el literal a) del artículo 6 del Decreto 813 de 1994, que ratifica el régimen de transición, al manifestar: "Cuando a 1 de abril de 1994 el servidor público hubiese prestado 15 años o más continuos o discontinuos, de servicios al estado, **cualquiera que sea su edad**, o cuenta con 35 años o más de edad si es mujer 40 años o más de edad si es hombre **tendrá derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez a cargo de la caja, fondo o entidad de previsión la cual se encuentre afiliado, cuando cumpla con los requisitos establecidos en las disposiciones del régimen que se le venía aplicando**".

El régimen que se venía aplicando es el artículo 1 de la ley 33 de 1985, Ley 62 de 1985, el inciso 2 del artículo 36 de la Ley 100/93, y no los artículos 21, 34 y el numeral 3 del artículo 36 de la ley 100 de 1993, como lo hizo el ISS hoy COLPENSIONES al momento de reconocer y liquidar la pensión de jubilación por vejez, con el promedio de lo cotizado durante los últimos 10 años anteriores al reconocimiento de la pensión.

Las normas de seguridad social son de orden público y estricto cumplimiento, resulta claro que si una persona se hizo acreedora a una pensión de jubilación bajo los parámetros de las Leyes 33 y 62 de 1985 por estar cobijada por el régimen de transición, debe ceñirse a los presupuestos de carácter jurídico establecidos en dichos preceptos legales.

Para ser sujeto del régimen de transición pensional no se requiere cumplir con los requisitos de edad y el de servicios o cotizaciones, sino tan solo uno de ellos; por eso la norma tiene una redacción disyuntiva: basta el requisito de edad (35 o 40 años) o el requisitos de servicios o cotizaciones (15 o más años). En el mismo sentido se dispuso en la norma reglamentaria, aunque con redacción diferente: menciona los dos requisitos (edad, servicios o cotizaciones) señalando que las personas deben cumplir "alguno" de ellos (Decreto 813 /94 art. 2).

Para el caso que nos ocupa, no es procedente aplicar los artículos 21, 34, numeral 3 del artículo 36 de la Ley de 1993, por cuanto el literal a del artículo 6 del Decreto 813 de 1994, es más claro cuando manifiesta que "el servidor público hubiese prestado 15 años o más continuos, de servicios al estado, **cualquiera que sea su edad.....** tendrá derecho al reconocimiento de la pensión de jubilación o vejez a cargo de la caja, fondo o entidad de previsión la cual se encuentre afiliado, cuando cumpla con los requisitos establecidos en las disposiciones del régimen que se le venía aplicando." La norma a aplicar son las leyes 33 y 62 de 1985 y el Decreto antes mencionado.

Cuando la norma habla respecto de la expresión "servicios cotizados", que es ciertamente imprecisa, es claro que alude a tiempos de cotización como también a servicios prestados (particularmente en el sector público donde no siempre se cotizaba). La norma reglamentaria se refiere con mayor propiedad a este requisito como "haber cotizado o prestado servicios (Decreto 813/94, artículo 2). Igualmente contempla en su artículo 6 literal a) que se deben aplicar **los requisitos establecidos en las disposiciones del régimen que se le venía aplicando, es decir liquidar la pensión con el 75% del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el año de servicios, establecidos en el artículo 1 de la ley 33/85 y la Ley 62 de 1985.**

Cuando entró en vigencia el régimen de transición para el sector público en junio 30 de 1995, tenía laborados 26 años, tres (03) meses y veinte (20) días; son hechos más que suficientes para que se protejan los derechos adquiridos y se liquide la pensión conforme a las Leyes 33 y 62 de 1985. **Igualmente, la demandante, contaba con 50 años de edad al momento en que entró a regir el régimen de transición para el sector oficial**

El consejo de Estado sostiene la tesis de que el ingreso base para liquidar la pensión es el mismo monto, es decir, que la remisión al régimen anterior en cuanto al "monto", implica no solamente remitirse al régimen anterior respecto al porcentaje de pensión sino también en cuanto a la base de dicho porcentaje. **Por ejemplo, pensión en el régimen de transición del servidor público se liquidará en el 75% del promedio de lo devengado en el último año** (Negrilla fuera del texto)

Esta tesis ha sido expuesta por el Consejo de Estado-Sección Segunda en varias providencias, por ejemplo en una de ellas, sentencia de septiembre 21 de 2000:

“Advierte la Sala, conforme a la acepción de la palabra “monto” que cuando la ley la empleó no fue para fuera el tanto por ciento de una cantidad, cono decir el 75% de alguna cifra, pues el porcentaje de la cuantía de una pensión no es sólo un número abstracto, que no se aproxima siquiera a la idea que sugiere la palabra monto, de ser el resultado de la suma de varias partidas, sino la liquidación aritmética del derecho, que precisamente se realiza con la suma del respectivo promedio de los factores que deben tenerse en cuanta y que debe hacerse, según el referido artículo 36, con apoyo en las normas anteriores a la Ley 100.

Por manera que las personas sometidas al régimen de transición deben jubilarse con la edad, el tiempo de servicios y el monto de la pensión gobernados por las normas anteriores a la ley 100, no ve la Sala cuáles son las demás condiciones para acceder al derecho, que según la última regla del inciso 2 rige por dicha ley.

De otro lado, la sala también observa que en el inciso 3 del artículo 36, están previstos unos ingresos base y una liquidación aritmética diferente a la que dedujo la Sala de la interpretación del inciso 2, puesto que del monto que se rige por las normas anteriores se infiere un ingreso base regido igualmente conforme al ordenamiento jurídico anterior, lo cual pone de presente la redacción contradictoria de tales normas, que conduce necesariamente a la duda en su aplicación y, por ende, por mandato del artículo 53 de la Constitución Política a tener en cuenta la más favorable o sea la primera regla del inciso 2 ”.

CONSIDERACIONES JURIDICAS

- | | |
|---|--------------------------------------|
| Sentencia T 631 de 2002 | MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra. |
| • Sentencia T-1000 de 2002 | MP Dr. Jaime Córdoba Triviño. |
| • Sentencia SU 120 de 2003 | MP Dr. Eduardo Montealegre Lynett. |
| • Sentencia T-158 de 2006 | MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto |
| • Sentencia T-251 de 2007 | MP Dr. Jaime Córdoba Triviño. |
| • Sentencia Consejo de Estado-Sala de lo Contencioso Administrativo-Sección Segunda | |
| Consejero Ponente Dr. GERARDO ARENAS MONSALVE, expediente | |
| 2500023400020130154101 de febrero 25 de 2.016 | |
| Referencia: 4683-2013 | |

Desde nuestra Constitución política se advierte el respeto a **los derechos adquiridos**, los mismos que se encuentran estrechamente relacionados con la aplicación de la ley en el tiempo, pues una ley posterior no puede tener efectos retroactivos para desconocer situaciones jurídicas concretas y consolidadas bajo la ley anterior (*principio de progresividad de las normas jurídicas*). Así lo ha hecho notar la H. Corte Constitucional de manera reiterada, entre otras, en la **Sentencia T-158 de 2006 MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto** donde manifestó:

“...El régimen de transición en materia de pensiones, regulado en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, entre otros, tiene como prerrogativa el reconocimiento de los derechos adquiridos, en el tránsito de una legislación de seguridad social a otra.” “...Así pues, la Corte ha sostenido que la aplicación de las normas del régimen especial está amparada por el respeto de los derechos adquiridos, que a su vez inspiró la consagración del régimen del transición en comento. Por ello, “[s]e ha considerado que la situación de las personas que se van acercando por edad o tiempo de servicio a las contempladas en la ley para acceder a la pensión de vejez, no es la misma de aquellas que apenas inician una vida laboral, llevan pocos años de servicio o su edad está bastante lejos de la exigida. Estas situaciones de orden fáctico justifican un trato diferente. Por eso, en muchas legislaciones se permite un régimen de transición cuando se modifican las condiciones del derecho a la pensión.” Y en este orden, se hace necesario el establecimiento de normas transitorias que den cuenta de los derechos en vía de adquisición.”

Ahora bien, entre las fuentes del derecho se encuentra el principio de **inescindibilidad de la ley** (lo que los doctrinantes han denominado teoría de la inescindibilidad), es decir, la imposibilidad de aplicar parcialmente la norma o de escindir su contenido. Este aspecto, en materia laboral es de asidua connotación en la aplicación integral de la norma más favorable a la parte más vulnerable (en nuestro caso el jubilado), máxime si se tiene en cuenta el principio de IN DUBIO PRO OPERARIO el mismo que se concatena de manera necesaria a los intereses pensionales de mi poderdante que hoy están siendo cercenados por el fondo de pensiones de manera injusta y desde luego contraria a la Constitución y a la Ley. Sobre el tema a manifestado la H. Corte Constitucional en la **Sentencia T 631 de 2002 MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra** lo siguiente:

*“...Dentro del anterior contexto, no puede haber exclusión de beneficios en el caso de regímenes especiales porque si la norma señala varios aspectos beneficiosos, no se puede decir que unos se aplican y otros no. Tal proceder afecta el **carácter inescindible de las normas** y viola los principios constitucionales antes referidos. La sentencia T-235/02, proferida por la Sala Sexta de Revisión, dijo: “Una vez entre en vigencia la norma que establece el régimen transitorio, las personas que reúnen los requisitos para adquirirlo consolidan una situación jurídica concreta que no puede ser menoscabada. Es además un auténtico derecho subjetivo que le da a su titular el derecho a que se le reconozca la prestación en las condiciones establecidas en la normatividad anterior y a acudir ante la jurisdicción en caso de incumplimiento.”*

No se explica el razonamiento parcializado y acomodado de la Administración al interpretar el precepto normativo objeto de estudio, porque requiere al jubilado a cumplir veinte años de incansable servicio público, le impone una tasa única de reemplazo del 75% (...así haya servido por 20 ò 30 años, da igual...) y al momento de hallar el IBL lo castiga, siendo este, junto con la edad, los alicientes del trabajador para retirarse y disfrutar de una pensión que le permita continuar con su status económico y prepararse financieramente para los “achaques” propios de la vejez. Pero no, la Administración en su posición de gendarme atropella al afiliado, le mutila sus derechos y lo arroja a los estrados judiciales en busca del amparo ...sin mayores remordimientos... situación que no se compadece en un Estado Social de Derecho como el nuestro, donde prima la dignidad humana y donde el ente gubernativo existe para la protección del ciudadano y no de los intereses burocráticos y presupuestales a conveniencia de quienes ostentan el poder y a costa del afiliado quien es el que finalmente financia su ejercicio. En este aspecto la H. Corte Constitucional en la misma **Sentencia T 631 de 2002 MP Dr. Marco Gerardo Monroy Cabra** expuso:

“...Dice la sentencia T-470/02 que “para lograr el cabal cumplimiento de los fines perseguidos por el Estado, se impone que las autoridades encargadas del reconocimiento de los derechos de las personas lo hagan en efecto, sin buscar esguinces, sin poner trabas que dificulten o hagan menos posible el goce efectivo de los derechos de las personas”.

“...La disminución de lo justo, en la liquidación de una pensión, afecta la calidad de vida del aspirante a pensionado, acostumbrado en su actividad laboral a recibir un salario que le ha permitido fijarse determinadas metas y compromisos. El mínimo vital tiene una dimensión cualitativa y no cuantitativa. Además, disminuir arbitrariamente el monto de una pensión es obligar a la persona a no retirarse del trabajo porque los ingresos salariales no tendrían la legal correspondencia con el ingreso pensional y esto afecta el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad del aspirante a jubilado y el derecho al descanso.”

“...evidentes razones de justicia material... llevaron al constituyente a vincular al Estado con la garantía de la dignidad de quienes, al término de su vida laboral, luego de contribuir con su trabajo a la construcción de la riqueza nacional, merecen de la sociedad, no sólo un justo reconocimiento sino una pensión equivalente a un porcentaje de su salario, para asegurar una vejez tranquila. Frente a este derecho, el Estado debe actuar con toda energía y prontitud, de manera tal que quienes han adquirido, en virtud de su edad y años de trabajo, una pensión de jubilación o vejez, no se vean, ni siquiera transitoriamente, desprotegidos frente a actos arbitrarios o negligentes del propio Estado o de los particulares que por ley estén obligados a asumir la prestación social.”

El Seguro Social hoy Administradora Colombiana de Pensiones-Colpensiones como Administrador del régimen de prima media con prestación definida, al interpretar de manera errada el inciso tercero del Artículo 36 del régimen general, atropella abiertamente un principio general del derecho: **LA EQUIDAD**. En relación con este tema y el objeto de la litis la H. Corte Constitucional en la **Sentencia SU 120 de 2003 MP Dr. Eduardo Montealegre Lynett** advirtió:

“3.2 La equidad, la jurisprudencia y las situaciones no previstas en la legislación laboral: De conformidad con lo previsto en el artículo 53 de la Carta Política y de acuerdo con lo reglado en el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo, entre dos o más fuentes formales del derecho aplicables a una determinada situación laboral, deberá elegirse aquella que favorezca al trabajador, y entre dos o más interpretaciones posibles de una misma disposición se deberá preferir la que lo beneficie. Pero no es lo único, al tenor de lo previsto en el artículo 230 de la Carta Política, el principio pro operario es un recurso obligado del fallador en su labor de determinar el referente normativo para solventar asuntos del derecho del trabajo no contemplados explícitamente en el ordenamiento.”

“...Estos elementos generales bastan para ilustrar la complejidad del tema. En las máximas latinas usualmente citadas está presente esta idea de la función de la equidad. Por ejemplo, el proverbio en el sentido de que el derecho aplicado al extremo puede conducir a una gran injusticia (summum ius, summa iniuria) refleja la necesidad de mitigar el rigor de la ley en ciertos casos, es decir, no guiarse estrictamente por el criterio dura lex, sed lex. La máxima según la cual la equidad aconseja cuando carezcamos de derecho (aequitas suggerit, ubi iure deficiamur) indica la función integradora de la equidad. Sin embargo, la distancia entre el derecho y la equidad no debería ser tan grande, al tenor de otra conocida máxima: en derecho hay que buscar siempre la equidad, pues de otro modo no sería derecho (ius semper quaerendum est equabile, neque enim aliter ius esset).”

“...Las consideraciones anteriores no apuntan a señalar hitos históricos en la evolución del concepto, sino que son pertinentes en la medida en que indican tres rasgos característicos de la equidad. El primero es la importancia de las particularidades fácticas del caso a resolver. La situación en la cual se encuentran las partes – sobre todo los hechos que le dan al contexto empírico una connotación especial – es de suma relevancia para determinar la solución equitativa al conflicto. El segundo es el sentido del equilibrio en la asignación de cargas y beneficios. La equidad no exige un equilibrio perfecto. Lo que repugna a la equidad son las cargas excesivamente onerosas o el desentendimiento respecto de una de las partes interesadas. El tercero es la apreciación de los efectos de una decisión en las circunstancias de las partes en el contexto del caso. La equidad es remedial porque busca evitar las consecuencias injustas que se derivarían de determinada decisión dadas las particularidades de una situación. De lo anterior también se concluye que decidir en equidad no es, de ninguna manera, decidir arbitrariamente. Al contrario, la equidad busca evitar la arbitrariedad y la injusticia, aún la injusticia que pueda derivar de la aplicación de una ley a una situación particular cuyas especificidades exigen una solución distinta a la estricta y rigurosamente deducida de la norma legal.”

El Instituto de Seguros Sociales hoy Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones han generado un perjuicio económico a la demandante al violar la constitución y la Ley al no aplicar la condición más beneficiosa y el principio de favorabilidad. Al respecto han sido varios los pronunciamientos de la H. Corte Constitucional como los siguientes:

- “...La “condición más beneficiosa” para el trabajador, se encuentra plenamente garantizada mediante la aplicación del principio de favorabilidad que se consagra en materia laboral, no sólo a nivel constitucional sino también legal, y a quien corresponde determinar en cada caso concreto cuál norma es más ventajosa o benéfica para el trabajador es a quien ha de aplicarla o interpretarla. De conformidad con este mandato, cuando una misma situación jurídica se halla regulada en distintas fuentes formales del derecho (ley, costumbre, convención colectiva, etc), o en una misma, es deber de quien ha de aplicar o interpretar las normas escoger aquella que resulte más beneficiosa o favorezca al trabajador. La favorabilidad opera, entonces, no sólo cuando existe conflicto entre dos normas de distinta fuente formal, o entre dos normas de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite varias interpretaciones; la norma así escogida debe ser aplicada en su integridad, ya que no le está permitido al juez elegir de cada norma lo más ventajoso y crear una tercera, pues se estaría convirtiendo en legislador.” (Sentencia SU 120 de 2003 MP Dr. Eduardo Montealegre Lynett.)
- “...Es de la esencia de las pensiones, su íntima relación con el salario devengado por el aspirante a pensionado. En la legislación anterior a la ley 100 de 1993, no existía la menor duda sobre la relación directa entre salario y pensión. La ley 1ª de 1932 estableció una escala móvil según el sueldo. La ley 6ª de 1945 estableció las dos terceras partes “del promedio de sueldos o jornales devengados”. El Código Sustantivo del Trabajo en su artículo 260, establecía como monto de la mesada el 75% “del promedio de salarios devengados en el último año de servicios”. Para los funcionarios del Estado, el artículo 27 del decreto 3135 de 1968 señaló medida idéntica. El decreto 1848 de 1969 clarifica que el porcentaje es sobre salarios y primas de toda especie. La ley 33 de 1985 mantiene el 75% “del salario promedio que sirvió de base para los aportes durante el último año de servicios”. (Sentencia SU 120 de 2003 MP Dr. Eduardo Montealegre Lynett.)
- “...la conclusión a la que ha llegado la Corte Constitucional consistente en que, en virtud de la interpretación de los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 a la luz de los artículos 53 (derechos adquiridos) y 58 (favorabilidad laboral) superiores, la aplicación del inciso tercero sólo es procedente cuando el régimen especial al que se encontraba afiliado el beneficiario del régimen de transición no estipulaba la fórmula para calcular el ingreso base de la pensión.” (Sentencia T-158 de 2006 MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto)
- “...Sobre la interpretación, tanto de la condición como de la excepción a la regla general, la jurisprudencia constitucional ha establecido que debe hacerse de conformidad con los principios que inspiran el régimen de transición. Así, tal como se expresó arriba, la protección y garantía de los derechos adquiridos y el principio de favorabilidad respaldan la implantación de los regímenes de transición, y conforme con éstos se debe procurar la aplicación integral de lo estipulado en los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993. De este modo, en primer lugar, la jurisprudencia ha establecido que los incisos segundo y tercero del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, deben entenderse de tal manera que el ingreso base para liquidar la pensión del que habla el inciso tercero, forma parte de la noción de monto de la pensión de que habla el inciso segundo. En dicho sentido, como el monto incluye el ingreso base, entonces uno y otro se determinan por un solo régimen y la excepción del inciso tercero resulta inocua. Dicha excepción sería aplicable únicamente cuando el régimen especial no estipula explícitamente el ingreso base para liquidar la pensión. Así, en el caso de los beneficiarios del régimen de transición, ambos (el ingreso base y el monto de la pensión) deben ser determinados por el régimen especial y la excepción no aplica, salvo que el régimen especial no determine la fórmula para calcular el ingreso base. (Sentencia T-158 de 2006 MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto).
- La Corte ha considerado que la no aplicación de las normas del régimen pensional al que se pertenece, reflejada directamente en la forma de liquidar la pensión constituye una vulneración no sólo al derecho al debido proceso, sino al derecho a la seguridad social. Esto por cuanto este último incluye el derecho a recibir la mesada pensional que corresponde y no otra. (Sentencia T-158 de 2006 MP Dr. Humberto Antonio Sierra Porto)

- “Para sustentar la anterior conclusión, esta Corporación ha considerado que el ingreso base de liquidación es un elemento inescindible del régimen especial aplicable al beneficiario de la modalidad de transición pensional. Por ende, la fórmula de cálculo prevista en el inciso tercero del artículo 36 es un método supletorio, en los términos mencionados. Incluso, la jurisprudencia constitucional ha determinado que la procedencia de la acción de tutela en contra de la actuación administrativa que, bajo el reconocimiento de la aplicación del régimen pensional especial en su caso concreto, determina el monto de la prestación a partir de las normas generales contenidas en el inciso tercero del artículo 36 mencionado. Sobre el particular, el precedente analizado dispuso que “las entidades encargadas del reconocimiento de una pensión de jubilación o vejez, se encuentran obligadas constitucionalmente a garantizar en el trámite y reconocimiento de las pensiones, los derechos mínimos de los trabajadores consagrados en el artículo 53 de la Constitución, los cuales, como lo ha establecido esta Corte, son inalienables, irrenunciables, no pueden ser disminuidos, ni se puede transigir sobre ellos “y se imponen inclusive al legislador y desde luego a los jueces y a los funcionarios administrativos.”|| Un yerro fáctico en tal sentido constituye una vía de hecho mediante la cual se viola el debido proceso dice la sentencia T-470/02 y por lo tanto, determinó el citado fallo, que no se aplica la resolución que comete tal violación, aunque estuviere ejecutoriada.” “...En líneas generales, este precedente parte de considerar que la presencia en el sistema general de pensiones de un régimen de transición encuentra justificación constitucional en la necesidad de garantizar el principio de favorabilidad en materia laboral, al igual que los derechos adquiridos de los trabajadores...” (Sentencia T-251 de 2007 MP Dr. Jaime Córdoba Triviño)

ESTIMACION RAZONADA DE LA CUANTIA

De conformidad con los artículos 155 numeral 2 y 157 del C.C. A., estimo la cuantía en \$19.129.994.

Para establecer dicha competencia y cuantía, relaciono la reliquidación de la pensión de los últimos tres (3) años así:

Reliquidación pensión año 2013	\$434.511. X6.5	mesadas	\$ 2.824.321.
Reliquidación pensión año 2014	\$442.941. X14	mesadas	\$ 6.201.174.
Reliquidación pensión año 2015	\$459.153. X14	mesadas	\$ 6.427.722.
Reliquidación pensión año 2016	\$490.237. X7.5	mesadas	\$ 3.676.777.
TOTAL RELIQUIDACION.....			19.129.994.

COMPETENCIA

Es competencia de su despacho, en primera instancia, la presente Acción Administrativa por la naturaleza de la acción, por la cuantía y por razón del territorio.

OPORTUNIDAD PROCESAL PARA FORMULAR DEMANDA

Teniendo en cuenta que los actos administrativos que se demandan, es a través del cual se reconoció una prestación periódica, no tienen caducidad, de conformidad con lo señalado en el literal C, numeral 1 del artículo 164 del C.C.A. Ley 1437 de 2011.

Tampoco hay lugar a prescripción alguna, ya que se debe tener en cuenta que la Corte Constitucional en sentencia SU-298 de mayo 21 de 2015 ordena reliquidar la pensión que se presenten en cualquier tiempo y aplicar la prescripción solo a las mesadas pensionales y no a las reliquidaciones, razón por la cual la pensión de jubilación por vejez de mi representada debe reliquidarse a partir del 01 de abril de 2005

MEDIOS DE PRUEBA

1 Documentales.- Para que sean tenidas como tales aporte los documentos que a continuación se relacionan:
-Copia de la resolución No. 03450 de marzo 10 de 2005 del Instituto de Seguros Sociales

- Copia auténtica de la reclamación administrativa de marzo 08 de 2016 radicación de COLPENSIONES No. 2.016-2339309
- Resolución GNR-108228 de abril 18 de 2.016 de COLPENSIONES en la que se niega la reliquidación de la pensión
- Copia auténtica del recurso de apelación de mayo 12 de 2016 radicación de COLPENSIONES No. 2016-4797578
- Copia auténtica de la resolución de COLPENSIONES No. VPB-25811 de junio 20 de 2016, en la que se reliquida erradamente la pensión
- Original certificación de marzo 08 de 2.016 de los salarios devengados y los factores salariales de abril de 2.004 a marzo de 2005
- Original constancia de marzo 14 de 2.016 del tiempo laborado como funcionario público en la C.V.C.
- Copia auténtica de la resolución No. D.G. 307 de marzo 31 de 2005 de la C.V.C. en la que se acepta la renuncia como servidor público a partir del 01 de abril de 2005
- Fotocopia de la cédula de la demandante.

ANEXOS

- Adjunto cuatro (4) copias de la demanda, una con destino a la secretaria del Juzgado, traslado a la demandada, Ministerio Público y para Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como en medio magnético con sus respectivos soportes conforme a los artículos 610 y 612 del Código General del Proceso
- Acompaño los documentos relacionados en las pruebas
- Poder conferido por mi mandante

NOTIFICACIONES

- El demandado Administradora Colombina de Pensiones-COLPENSIONES- en la calle 24 Norte No. 6AN-42 Cali Santa Mónica, buzón electrónico notificacionesjudiciales@colpensiones.gov.co
- El demandante en la calle 17 sur No.5-37 Buga-Valle, teléfono 2388632-316-6969408 bajo la gravedad del juramento manifiesto que no posee correo electrónico
- Las personales las recibiré en la calle 2 sur No. 4-50 Buga-Valle, teléfono 316-7488767 correo electrónico memomol@hotmail.com
- La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en la carrera 7 # 75-66, teléfono 2558955 Bogotá D-C., correo electrónico buzonjudicia@defensajuridica.gov.co
- A la Procuraduría General de la Nación (Ministerio Público), en el despacho de la delegada ante lo Contencioso Administrativo y/o en el buzón procjudadm84@procuraduria.gov.co – calle 12 # 8-11 Of. 416 y 17 teléfono 5878750 Bogotá D.C.

Cordialmente,

GUILLERMO DE J. MOLINA CRUZ
C.C. N° 14.876.815 Buga
T.P. 55.052 del C.S. de la J.